



RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, EN RELACION CON LA CONTROVERSIA DERIVADA DEL DICTAMEN NUMERO DIC/CRAF-018/02, DE LA COMISION REVISORA PERMANENTE DE LA APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS, RELACIONADO CON LOS INFORMES JUSTIFICATORIOS PRESENTADOS POR EL PARTIDO ACCION NACIONAL, ACREDITADO ANTE ESTE ORGANO CENTRAL, BAJO EL RUBRO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACION

Heroica Puebla de Zaragoza, a veintiséis de marzo de dos mil tres.

VISTOS, para resolver en definitiva los autos que integran el expediente formado con motivo de la controversia derivada del dictamen número DIC/CRAF-018/02, de la Comisión Revisora Permanente de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos, en relación con los informes justificatorios presentados por el Partido Acción Nacional, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, bajo el rubro de actividades ordinarias permanentes y acceso a medios de comunicación, y:

R E S U L T A N D O

I.- Que, este Organo Central durante el desarrollo de la sesión ordinaria de fecha veinticuatro de julio del año próximo pasado aprobó el Proceso Administrativo para la resolución de las controversias derivadas de los dictámenes de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los que se detectaron irregularidades en los informes justificatorios.

II.- Que, la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos en sesión de fecha once de diciembre de dos mil dos aprobó el dictamen número DIC/CRAF-018/02, relativo a los informes justificatorios presentados por el Partido Acción Nacional, bajo el rubro de actividades ordinarias permanentes y acceso a medios de comunicación.

En el referido documento la Comisión revisora dictaminó en lo conducente lo siguiente:



“ . . .

III.- Que, en atención a todo lo anterior, esta Comisión Permanente analizará, de manera exhaustiva, el cumplimiento, por parte del citado Partido Político, de los extremos que establece el artículo 11 de los *“Lineamientos generales para la fiscalización del financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado”*, mismo que en forma textual dice: *“Los informes justificatorios deberán ser presentados mensualmente por los Partidos Políticos, dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que se justifica.*

En el caso del financiamiento público que se distribuirá en el año 2001, se empezarán por justificar a partir del mes de julio del año 2001 y hasta el mes de junio del año 2002, para los rubros de actividades ordinarias permanentes y el acceso equitativo a los medios de comunicación social.”

Por su parte, el diverso 74, de los referidos *Lineamientos* establece: *“Los partidos políticos deberán presentar ante la Comisión Revisora del Financiamiento, los informes anuales del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:*

a) Informes anuales:

I.- Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de junio del año 2002.

II.- En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.”

Es decir, relacionando tales artículos 11 y 74 de los mencionados *Lineamientos*, con el diverso 52, primer párrafo, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, se aprecia, por parte de esta Comisión Revisora, que los Partidos Políticos deberían presentar los informes justificatorios respectivos, acompañados del sustento documental correspondiente.

En este sentido, y en el caso concreto, se debe manifestar lo siguiente:

a).- Por lo que respecta a los referidos informes mensuales, el Partido Político en comento, presentó todos a los que estaba obligado; sin embargo, los correspondientes a los meses de octubre de dos mil uno, y enero de este año, los presentó de manera extemporánea.

b).- En relación con el informe anual al que, de igual forma, estaba obligado a presentar el Partido Acción Nacional, y respecto a actividades ordinarias permanentes y el acceso a los medios de comunicación, lo presentó dentro del término establecido para ello.

Lo anterior, tal como consta en los archivos de este Instituto, documentales privadas que, en términos de los artículos 358, fracción II, y 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, hacen prueba plena, toda vez que no fueron objetadas.

De esta manera, la Comisión Revisora cuenta con los instrumentos jurídicos para determinar, si en dichos informes, existen inconsistencias o irregularidades, que deban ser observadas, en su caso.

Además, se analizará la documentación correspondiente, y que acompañó, en su momento, el referido Partido Político a los mencionados informes justificatorios; esto es, no sólo se analizarán esos informes, sino también el sustento documental respectivo.

Máxime, que en cumplimiento de sus atribuciones, esta Comisión Permanente, debe observar los principios rectores a que se refiere el artículo 8 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y que a la letra dice: *“En el ejercicio de la función estatal para organizar las elecciones, serán principios rectores, la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, debiéndose entender por:*

I.- Legalidad.- Adecuación estricta a la ley de todas las actuaciones de las autoridades electorales, de los ciudadanos y de los partidos políticos;

II.- Imparcialidad.- Actuación neutral de quienes desarrollan la función estatal de organizar las elecciones, sin beneficiar ni perjudicar a alguna de las partes en la contienda electoral;

III.- Objetividad.- Desarrollar las actividades electorales tomando como base la realidad única, sin importar cualquier punto de vista parcial que se tenga de ella;

IV.- Certeza.- Realizar la función electoral con estricto apego a los hechos y en la realidad única, a fin de que sean fidedignos, confiables y verificables; y

V.- Independencia.- La capacidad irrestricta del Instituto para cumplir con la función encomendada por sí solo, sin intervención alguna de los órganos del poder público.”

En virtud de lo anterior, y previo análisis de la documentación correspondiente, esta Comisión Revisora determina que sí existen observaciones que plantear, en relación con los



informes justificatorios presentados por el Partido Acción Nacional, acreditado ante el órgano central de este organismo, bajo el rubro de actividades ordinarias permanentes y el acceso a los medios de comunicación, tal como se desprende del contenido de los siguientes considerandos y de los anexos que forman parte integral de este dictamen; observaciones que se precisan, específicamente, en el considerando VI, de este documento.

...

V.- Que, en atención al acuerdo CG/AC-030/01, referido en el antecedente 4 de este dictamen, mismo que tiene el carácter de documental pública y, por consiguiente, en términos de los artículos 358, fracción I, inciso a), y 359 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, hace prueba plena; al Partido Acción Nacional, se le otorgó financiamiento público estatal, con base en los artículos 46 y 47 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, específicamente, bajo el rubro de actividades ordinarias, la cantidad de cuatro millones quinientos tres mil quinientos ochenta pesos, setenta y siete centavos, moneda nacional (\$4'503,580.77 M.N.), y por concepto de acceso a los medios de comunicación, la cantidad de seiscientos sesenta y siete mil seiscientos veintidós pesos, noventa y un centavos, moneda nacional (\$667,622.91 M.N.)

Por otra parte, tal como se manifestó en el antecedente 8 de este dictamen, el Partido Acción Nacional argumentó que dichas cuotas son depositadas en la cuenta federal entregando un recibo por la aportación correspondiente. Las cuotas son utilizadas para el gasto ordinario del partido, y se manejan de acuerdo a los lineamientos que nos establece el Instituto Federal Electoral.

En síntesis, el Partido Político en comento, sólo recibió como fuente de financiamiento, bajo los rubros relativos a actividades ordinarias y el acceso a los medios de comunicación, la siguiente: financiamiento público local.

En atención a ello, y con fundamento en los diversos 51, 52, 53 y demás relativos del mencionado Código de la materia, esta Comisión Permanente, tiene la atribución de revisar los informes y el sustento documental correspondientes a dicho Partido Político, y fiscalizar los recursos que el Estado le haya otorgado, por concepto de financiamiento público local. Por lo anterior, es de considerarse que ese financiamiento sí es revisable, en cuanto a su aplicación y destino, por parte de esta Comisión Revisora.

Para los efectos legales correspondientes, debemos atender a lo que establece el artículo 46 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, mismo que dispone: *“El financiamiento público es la aportación que otorga el Estado a los partidos políticos como entidades de interés público, para el desarrollo y promoción de sus actividades en la vida política de la Entidad, la obtención del voto y el acceso equitativo a los medios de comunicación ”*

...

VI.- Que, en atención a los considerandos anteriores, se debe tomar en cuenta al artículo 77 de los citados *Lineamientos*, el cual señala que *“una vez recibido el informe a que hace mención el artículo anterior, la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento procederá a realizar un dictamen que deberá contener por lo menos los siguientes puntos:”*

“a).- Los procedimientos y formas de revisión aplicados.”

Por lo que respecta a este inciso, debe decirse que los procedimientos y formas de revisión aplicados, consistieron en el examen, de las operaciones financieras, documentación, registros contables y demás evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que fueron necesarias para efectuar la vigilancia de los recursos financieros, en estricto apego a lo establecido en los *“Lineamientos generales para la fiscalización del financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado”*, y en aplicación a los Principios de Contabilidad generalmente aceptados, Normas de Auditoría y Leyes Fiscales vigentes, permitiendo obtener una seguridad razonable del empleo de los recursos con que contó el Partido Político en mención.

Es decir, se utilizaron técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros, las cuales consistieron en el estudio general de las cuentas o las operaciones, a través de sus elementos más significativos para concluir si era necesario profundizar en su estudio; asimismo, se aplicó el análisis de las cuentas de los estados financieros, así como la verificación aritmética de aquellas cuentas u operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre bases precisas, y por último la verificación física de que el sustento documental correspondiente reuniera los requisitos legales respectivos.

El inciso b), del mencionado artículo 77, dispone:



“b).- El resultado y las conclusiones de la revisión de los informes por actividades ordinarias y el acceso a los medios de comunicación social y el informe de campaña presentados por cada partido político, y de la documentación comprobatoria correspondiente, señalando las aclaraciones y rectificaciones que haya presentado cada partido político después de haber sido notificado con ese fin y la valoración correspondiente;”

Sobre este punto, cabe advertir que el presente dictamen únicamente se ocupa de los rubros relativos a actividades ordinarias y el acceso a los medios de comunicación, y en opinión de quien esto dictamina, los informes justificatorios y los estados financieros presentados por el mencionado instituto político, con relación a esos rubros, previo análisis de los mismos, presentaron observaciones mismas que, en su momento, y como se manifestó en el capítulo de antecedentes de este dictamen, le fueron notificadas al referido instituto político y su valoración se fue haciendo, paulatinamente, conforme se presentaron las aclaraciones, por parte del Partido Político, en su caso, tal como se señaló, específicamente, en los puntos de antecedentes 11, 12 y 13 de este dictamen.

Finalmente, el inciso c), del artículo 77, de los citados *Lineamientos*, establece:

“c).- En su caso, la mención de los errores o irregularidades encontradas en los informes o generadas con motivo de la revisión.”

Sobre este último inciso, debe señalarse que la existencia de errores u omisiones técnicas determinadas en la revisión que realizaron la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, de este organismo, y esta Comisión Revisora, a la documentación comprobatoria sobre el manejo de esos recursos, no fueron cumplimentadas por el instituto político en cuestión, tal como se advierte de la documentación correspondiente y, en resumen, de los anexos que corren agregados a este dictamen, para formar parte integral del mismo.

Esto es, el referido Partido Político, incumplió con los artículos 11 y 65 de los *“Lineamientos generales para la fiscalización del financiamiento a los Partidos Políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado”*.

En virtud de todo lo anterior, y una vez analizados los informes y demás documentación que obra en los expedientes respectivos, *esta Comisión Permanente considera que existen observaciones sobre el manejo de los recursos y en los informes justificatorios, por parte del Partido Acción Nacional, respecto a los rubros relativos a actividades ordinarias y el acceso a los medios de comunicación*, que erogó dicho instituto político, dentro del periodo comprendido del veintiséis de junio de dos mil uno, al veinticinco de junio de este año.

...

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, fracción IV, del Reglamento de Comisiones del Instituto Electoral del Estado, la Comisión Permanente Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos:

D I C T A M I N A

PRIMERO.- Esta Comisión Revisora es competente para conocer y emitir opinión sobre el presente asunto, en términos de los considerandos I y II, de este dictamen.

SEGUNDO.- Este órgano del Consejo General determina que existen observaciones respecto del manejo de los recursos y de los informes justificatorios presentados por el Partido Acción Nacional, por lo que respecta a los rubros relativos a actividades ordinarias y el acceso a los medios de comunicación, en términos de los considerandos III, V y VI del presente dictamen.

... ”

III.- Que, mediante memorándum número IEE/CRAF-103/02, de fecha doce de diciembre de dos mil dos, recibido en la oficina de la Presidencia en esa fecha, el Consejero Electoral Presidente de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos, Licenciado José Manuel Rodoreda Artasánchez, remitió al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado el dictamen materia de este fallo.

IV.- Que, el Secretario General del Organismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Proceso Administrativo señalado en el



punto I de Resultando, mediante oficio número IEE/SG-917/02 de fecha trece de diciembre del año dos mil dos corrió traslado al Partido Acción Nacional, con el dictamen número DIC/CRAF-018/02, de la Comisión Revisora Permanente de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos, con relación a los informes presentados por dicho Instituto Político, bajo el rubro de actividades ordinarias permanentes y acceso a medios de comunicación, con la finalidad de que en el término de diez días posteriores a aquel en el que se efectuó la notificación contestara lo que a su interés conviniera, aportando las pruebas necesarias para acreditar su dicho, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se le tendría contestando el mencionado dictamen en sentido negativo.

La notificación en comento se efectuó el diecinueve de diciembre del mencionado año, a las nueve horas con cincuenta minutos, según consta en la razón correspondiente.

V.- Que, el veinte de enero del año en curso, el Partido Acción Nacional, por conducto de su Representante Propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, Licenciado Luis Enrique Palacios Martínez presentó en la Oficialía de Partes del Organismo un escrito por el que dio contestación al dictamen número DIC/CRAF-018/02, de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante este Organismo Electoral, relacionado con los informes justificatorios presentados por dicho Instituto Político, bajo el rubro de actividades ordinarias permanentes y acceso a medios de comunicación.

En el referido escrito el partido político en comento argumentó textualmente lo siguiente:

“ . . .

Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, 3, 6 y 7 del Proceso Administrativo para la Resolución de las Controversias Derivadas de los Dictámenes de la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los que se determinaron que existen observaciones al Partido Político que represento respecto a lo que esta denomina "Informe Justificatorio relativo a los rubros a Actividades Ordinarias Permanentes y Acceso a los Medios de Comunicación mediante el Dictamen DIC/CRAF-018/02 emitido por la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos, vengo a manifestar lo que al derecho e interés de mi representado conviene, lo que paso hacer al tenor de los siguientes:

ALEGATOS

I.- Respecto a lo señalado por la autoridad dictaminadora, sobre de que se trata de un Dictamen de una revisión de los informes justificatorios por actividades permanentes ordinarias y accesos a Medios de Comunicación presentados por el partido político, podemos señalar que se trata de la realización indebida de un Dictamen que no contempla los Lineamientos Generales para la Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos, ya que en realidad se trata de un simple dictamen elaborado en base a un indebido informe elaborado por la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos, Medios de Comunicación



quien sin ninguna base normativa y legal realiza sobre la revisión del informe anual presentado por el Partido Político que represento y además que también en plena contradicción con el artículo 78 de los Lineamiento para la Fiscalización, elabora un informe en base y en forma conjunta con la revisión de los informes mensuales, es decir, claramente este artículo señala "que la Comisión Revisora dispondrá de un plazo de 30 días para la elaboración del dictamen. Con base en los informes que haya elaborado la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación respecto a la verificación de los informes mensuales de cada partido político". Es decir señala claramente su diferencia con la revisión del informe y dictamen anual y de campaña establecidos en el artículo 74 y 75; por lo que se puede establecer claramente que deberá existir un dictamen por cada informe mensual elaborado por la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, pues de otra forma sería inoperable y no tendrían objeto los presupuestos establecidos en los artículos 72 y 73 de los lineamientos, en dónde se establecen los términos para realizar el informe sobre revisión de informes mensuales de los partidos políticos y para su presentación a la Comisión Revisora, para el objeto de que esta Comisión elabore su dictamen en relación en los artículos 76 y 78 de los Lineamientos Generales de Fiscalización, ni más ni menos, ya que en el caso contrario de atender a la interpretación errónea de la autoridad revisora y dictaminadora hace sobre tales disposiciones normativas por la cual concluye de que se realizará un dictamen con la suma o resumen de todos y cada uno de los informes realizados en base a la revisión de los informes mensuales por cada partido político y así mismo la del informe anual, se estaría ante la incertidumbre para aplicar el termino, ya sea el de treinta días posteriores a la fecha de presentación del último informe mensual rendido por la Dirección de Prerrogativas, siendo este el del informe mensual correspondiente al mes de junio del año dos mil dos tal como /o señala la autoridad dictaminadora el informe rendido sobre la revisión de este último informe fue el día cuatro de junio del año 2002, por /o que en términos de los artículos 76 y 78 de los Lineamientos Generales para la Fiscalización, debió ser elaborado el dictamen respectivo treinta días hábiles después siendo estos el día dieciséis de julio del año próximo pasado y no el día once de diciembre de ese mismo año, es decir, no cinco meses después aproximadamente de haberse presentado el último informe sobre la última revisión del último informe mensual del ejercicio del año 2001(mes de junio 2002) por lo que evidente resultaría extemporáneo tal dictamen, por lo que se deduce que dicho acto ha preescrito y por tanto al haberse extinguido el plazo para realizar el dictamen y en su caso determinar las observaciones a los informes justificatorios resulta totalmente invalido e ilegal el dictamen y observaciones, por tal el procedimiento administrativo carece de validez por ser extemporáneo el dictamen; o bien aún atendiendo a la interpretación equivocada, unilateral y automática que la autoridad dictaminadora fijo y se basa al tratar de realizar un dictamen de un informe realizado con la suma de todos los informes realizados con motivo de la revisión de los informes mensuales e incluyendo el informe sobre la revisión del informe anual y de campaña realizado indebidamente y sin ninguna facultad por la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, y con ello tratar de atender y señalar como plazo a los términos y plazos señalados por la revisión y dictamen del informe anual establecidos en el artículo 75, sin tomar en cuenta los plazos y términos establecidos para el de revisión y elaboración del informe sobre los informes justificatorios mensuales, este también además de ilegal indudablemente también podría resultar extemporáneo ya que a partir de la presentación del informe anual por este partido político tal como lo señala la autoridad dictaminadora el 12 de junio del año 2002 (se señala en el número 7 de los antecedentes del dictamen) y la Comisión revisora al contar con 60 días para la revisión del mismo (culminaría el día 4 de septiembre 2002) o en su caso la terminación de la fecha o termino concedido para contestar, aclarar, rectificar el requerimiento hecho a los partidos políticos (concluiría en su caso el día 19 de septiembre del 2002), para que a partir de estos se empezará a contabilizar los 30 días para la elaboración del dictamen (pues no hay señalamiento para la elaboración de un informe sobre la revisión concedido a la Dirección de Prerrogativas), sería como fecha límite el día 16 de octubre del año próximo pasado, por lo que al ser elaborado como se desprende del propio dictamen el día once de diciembre del 2002, resulta evidentemente extemporáneo y por ende inválido, aunque vale la pena mencionar que para efectos de contabilizar los días y a pesar de que no se prevé en ninguna disposición de los Lineamientos en como se deberán computar estos, esta se realizo en términos del artículo 166 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado por lo que todos los días se computaron como hábiles.



Por lo anterior no existe apego al principio de certeza, legalidad por parte de la autoridad dictaminadora por lo que el Dictamen se reputa como ilegal y con falta de certeza por lo cual debe declararse improcedente por infundado e inmotivado, además de que al ser extemporáneo el dictamen de la autoridad dictaminadora a prescrito el derecho a realizar su dictamen y observaciones, es decir caduco su derecho para determinar las omisiones, errores, inobservancias e incumplimientos del partido político que represento, por lo cual este procedimiento administrativo es inválido.

II.- No obstante lo anterior y para el improbable caso de que esta autoridad no atendiera los señalamientos sobre la improcedencia de dicho dictamen, paso a combatir las observaciones que la autoridad señala en el tenor de sus considerandos:

A) La autoridad dictaminadora señala en sus considerandos III, IV , V, VI y VII en resumen que el partido que represento incumplió con el artículo 11 de los lineamientos, pues presento fuera de los plazos marcados en el mismo numeral señalado los informes mensuales de octubre 2001 y enero 2002, en efecto fueron presentados en forma extemporánea pero esto de ninguna manera por sí solo puede concluirse como un incumplimiento a un acuerdo del Consejo General o alguna violación o infracción alguna disposición del Código de la materia, ni tampoco se pueda considerar en base a esto que se ha determinado un manejo indebido, irregular y que inclusive pueda afectar la transparencia de los recursos públicos cuyo objeto persigue el establecimiento de los Lineamientos de Fiscalización, se trata simplemente de la omisión de haberse retardado en la presentación de los mencionados informes por circunstancias netamente de facto, además de que como lo he mencionado anteriormente estas observaciones debieron haber sido objeto de un dictamen mensual, el cual nunca fue hecho en tiempo y forma o en su caso estamos ante la observación en un Dictamen que a todas luces es inválido e improcedente por no estar contemplado y ser extemporáneo.

B) Respecto a que existe un incumplimiento al numeral 65 de los Lineamientos Generales de Fiscalización, en relación a que la factura 806 número de documento 1615 del mes de abril tiene fecha de expedición caduca, basta mencionar que dicha factura nunca fue requerida en tiempo y forma dentro de la revisión al informe mensual correspondiente al mes de abril del año próximo pasado, tal como lo demuestro con la contestación realizada por el encargado de la administración y finanzas del partido que represento en fecha 17 de octubre del año dos mil dos al primer requerimiento hecho por la Dirección de Prerrogativas dentro de un proceso de Revisión al Informe Anual lo que es improcedente, documento en el cual se señala claramente que en contestación al requerimiento hecho mediante mesa de trabajo de fecha nueve de octubre del año 2002, dónde se señala que nunca fue requerido en tiempo y forma, no obstante lo anterior es oportuno recalcar que seis meses después de su revisión, me encontraba imposibilitado para solventar tal observación, ya que el excesivo transcurso del tiempo el proveedor no acepto cancelar la otorgada y expedir una nueva, por lo que nadie está obligado a lo imposible, por lo que señalo que existen imprecisiones sobre el procedimiento ya que tal observación debió hacerse inmediatamente a su presentación, es decir, dentro de los treinta días con los que cuenta la dirección de prerrogativas para la revisión de los informes justificatorios mensuales que se remiten con todos los comprobantes y no hasta la revisión del informe anual que simplemente es el resumen de los ingresos y gastos totales, este hecho refuerza y asevera que después de haberse rendido los informes y observaciones mensuales, no puede regresarse a revisar lo ya revisado ya que de lo contrario tampoco existe certeza de que lo ya revisado y no observado, sea sujeto esto de otra revisión que declare que existieron más irregularidades, pues resultan evidente contradicciones y de ser así como lo pretende la autoridad dictaminadora no tendría ningún objeto la revisión mensual, también al tratarse como al caso concreto de requisitos de forma del comprobante, no se brindan las reglas o consideraciones por la autoridad dictaminadora para que estas sean subsanadas inmediatamente o bien se tengan por aclaradas, por lo que las instancias nunca alcanzan definitividad y al hacerse valer en otra etapa posterior y por el transcurso del tiempo no existe posibilidad o forma de subsanar, corregir y remediar lo que se refleja como un estado de incertidumbre y de indefensión para los partidos políticos. Es decir al no concluir las etapas, y al dejar la posibilidad de volver a reabrir o revisar lo ya revisado en estas etapas posteriores y sin ninguna razón lógica y normativa esto indudablemente resulta conculcativa de las garantías procesales de legítima defensa y seguridad jurídica y de nada serviría el haber emitido un informe y conclusión sobre los informes mensuales, si la autoridad revisora y



dictaminador por sí mismo determina revisar y modificar cinco meses después lo ya revisado, sin que exista la disposición normativa específica y este actuar traiga efectos contradictorios y violatorios de las disposiciones legales y que mermen los derechos de defensa de las partes, así como también por el violentamiento del procedimiento establecido para la revisión de los informes justificatorios y en su caso la elaboración de los informes y en consecuencia de la elaboración de dictámenes.

Es por ello que ante todo lo anterior lo procedente es señalar que es improcedente el dictamen y sus consideraciones y por consecuencia las observaciones que determina ordenando el archivo del presente dictamen como asunto concluido.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma por medio de] presente escrito y ofreciendo las pruebas que del mismo se desprenden y que he referido en los puntos de alegatos de este documento, manifestando lo que al interés y derecho conviene de mi representado, contestando y contraviniendo las observaciones del Dictamen elaborado por la Comisión Revisora de la Aplicación del Financiamiento de los Partidos Políticos, con relación a los informes mensuales y anual Justificatorio presentados por el Partido Acción Nacional y denominado por la autoridad dictaminadora bajo el rubro de actividades ordinarias permanentes y Acceso a los Medios de Comunicación.

SEGUNDO.- En su oportunidad acordar como improcedente e infundadas las observaciones e irregularidades señaladas en el Dictamen rendido por la Comisión Revisora, declarando el asunto como total y absolutamente concluido.

... ”

VI.- Que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5 del Proceso Administrativo para la resolución de controversias derivadas de los dictámenes de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los que se detectaron irregularidades en los informes justificatorios, el Secretario General del Organismo procedió a integrar el expediente relativo a la controversia derivada del dictamen DIC/CRAF-018/02.

Lo anterior, con la finalidad de estudiar de manera integral las constancias que componen dicho expediente y estar en posibilidad de resolver el presente asunto con estricto apego a los principios de certeza y exhaustividad.

VII.- Que, una vez que se efectuó el estudio correspondiente y en atención a que los presentes autos se encuentran en estado de ser resueltos, se somete al conocimiento del Pleno del Consejo General del Organismo el presente proyecto de resolución, en los términos que a continuación se plantean.

C O N S I D E R A N D O

1.- Que, el Consejo General del Organismo es competente para conocer y resolver la presente controversia derivada del dictamen número DIC/CRAF-018/02 de la Comisión Revisora de la aplicación del



financiamiento de los partidos políticos acreditado ante este Organismo Electoral, en términos de lo dispuesto por los artículos 53, 89 fracción XX del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 1 y 8 del Proceso Administrativo para la resolución de las controversias derivadas de los dictámenes de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los que se detectaron irregularidades en los informes justificatorios.

2.- Que, en atención a lo dispuesto por los artículos 42 fracciones I y IV y 80 fracción IV del Código de la materia y el diverso 3 del Proceso Administrativo en comento, el Consejo General de esta Organismo Electoral reconoce la personería del Partido Acción Nacional, promoviendo por conducto de su representante propietario acreditado ante este Organo Central, Licenciado Luis Enrique Palacios Martínez.

3.- Que, observando el principio de exhaustividad al que deben apegarse todas las resoluciones emitidas por las autoridades electorales tal y como lo establece la tesis relevante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: *“EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”*, este Organo Central debe determinar si el dictamen de la Comisión Revisora del Financiamiento de los partidos políticos materia de este fallo se encuentra debidamente fundado y motivado.

Con la finalidad de garantizar el estudio exhaustivo del asunto materia de esta resolución, el Consejo General del Organismo considera necesario establecer el método que utilizará para analizar todas y cada una de las constancias que integran el expediente relativo, por lo que con la finalidad de dar certeza al mencionado análisis se estudiará en primer lugar el dictamen elaborado por la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos, junto con sus anexos; posteriormente se estudiará el escrito de constatación presentado por el Partido Acción Nacional, así como las pruebas, que en su caso aporte u ofrezca el Instituto Político para justificar su dicho y por último los demás elementos que se integraron al expediente y que se relacionan con la revisión de los informes justificatorios presentados, esto con la finalidad de poder relacionar todos y cada uno de los elementos que integran el expediente y contar con los datos que permitan determinar con certeza si el dictamen materia de este fallo se encuentra debidamente fundado y motivado y en consecuencia en procedente aprobarlo en sus términos.

Las disposiciones legales aplicables para el estudio que realizará el Consejo General del Instituto Electoral del Estado son:



A. Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla;

B. Lineamientos Generales para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado;

C. Proceso Administrativo para la resolución de controversias derivadas de los dictámenes de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en los que se detectaron irregularidades en los informes justificatorios; y

D. Acuerdo número CG/AC-048/02, por el que establece el criterio de interpretación del artículo 52 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla aprobado por el Consejo General del Organismo en sesión ordinaria de fecha veinticuatro de julio de dos mil dos.

4.- Que, tal y como se estableció en el considerando anterior, los preceptos legales en los que se fundará esta resolución son la Constitución Política del Estado, el Código de la materia, los Lineamientos Generales de Fiscalización y el contenido del acuerdo número CG/AC-048/02, aprobado en sesión ordinaria de fecha veinticuatro de julio de dos mil dos.

En este orden de ideas, el Consejo General del Organismo, en atención a que la presente resolución tiene como finalidad determinar si existieron irregularidades en la administración de los recursos de los partidos políticos y en caso de que así se acredite comunicar dicha determinación al Tribunal Electoral del Estado para que en términos del Código aplicable sancione al instituto político que se encuentre en dicho supuesto, considera que resulta necesario determinar en primer lugar cuál es el objetivo que persigue la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos, para estar en posibilidad de determinar si los errores u omisiones en el manejo de los recursos en comento constituyen una violación a dicho fin superior.

Se considera que al establecer un marco de referencia que basado en la doctrina del derecho electoral y en la jurisprudencia que sobre el tema ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, permita dilucidar cuál es el fin y la naturaleza de la figura del financiamiento de los partidos políticos en el sistema electoral mexicano, será más sencillo determinar el objetivo que persigue el control y vigilancia de dichos recursos.

En este sentido el jurista Javier Patiño Camarena al referirse al financiamiento de los partidos políticos, cita la afirmación expresada por



Arturo Sánchez Gutiérrez, en el sentido de que existe una estrecha relación entre la cantidad de recursos con que cuenta un partido para sus actividades y campañas electorales y el efecto que puede generar en los electores, en los últimos años en los regímenes democráticos contemporáneos ha adquirido importancia creciente la regulación de los recursos económicos de que disponen los partidos. (“El régimen de los partidos políticos y las condiciones de competencia electoral”, intervención en el *Foro de consulta para la reforma electoral*, organizado por el Instituto Federal Electoral en mil novecientos noventa y tres).¹

Además, Patiño Camarena establece, de manera general que existen dos vías de financiamiento, la pública y la privada. El financiamiento público obedece al propósito de garantizar la independencia de los partidos políticos frente a los grupos económicos y al deseo de establecer ciertas condiciones de competencia igualitaria en la contienda electoral, es decir, este tipo de financiamiento fue una respuesta al desequilibrio de las condiciones de competencia partidaria, pues al ser el Estado el principal financiero, los partidos podrían estar en condiciones de cumplir sus funciones como instituciones representantes de la sociedad, con independencia de grupos de presión económica y avocados completamente a la actividad política.²

Por último, el mencionado jurista al citar a la investigadora María de la Luz Mijangos, señala que el financiamiento público favorece, en primer término la independencia de los partidos de los grandes capitales y se evita que la contienda electoral se vuelva censataria; asimismo considera que este tipo de financiamiento favorece la igualdad de trato en su otorgamiento y la transparencia en la asignación de recursos (Intervención en el *Foro de consulta para la reforma electoral*, organizado por el Instituto Federal Electoral en mil novecientos noventa y tres)³

Con respecto a los criterios de jurisprudencia emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe decirse que en las distintas Tesis sustentadas por dicho Tribunal toman como base el concepto de equidad, el cual debe traducirse, necesariamente, en asegurar a aquéllos el mismo trato cuando se encuentren en igualdad de circunstancias.⁴

¹ Patiño Camarena, Javier. Nuevo Derecho Electoral Mexicano. Ed. Constitucionalista e IFE. Quinta Edición. México D.F., 1999. Pág. 339.

² Ibidem.

³ Ibidem.

⁴ La Justicia Electoral en México y su Jurisprudencia. Disco compacto editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se consultó el contenido de las Tesis cuyos rubros son: FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A FIJARLO EN IGUALES TÉRMINOS QUE EN EL ORDEN FEDERAL y FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL. EL DERECHO A RECIBIRLO ES DIFERENTE PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARTICIPANTES EN UNA ELECCIÓN ANTERIOR QUE NO



En este orden de ideas, se puede concluir que la regulación del financiamiento en el derecho electoral mexicano tiene como finalidad:

- A.- Asegurar la independencia financiera de los partidos políticos, protegiéndolos de los grupos económicos poderosos;
- B.- Establecer condiciones para asegurar la igualdad de condiciones en la contienda electoral;
- C.- Desde el punto de vista de la equidad en la contienda regular el monto del financiamiento privado, sin que esto signifique la desvinculación de los partidos con sus militantes, afiliados o simpatizantes.

Visto lo anterior, se puede determinar de manera general que la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos tienen como finalidad el vigilar que en la administración y aplicación de los recursos con los que cuentan estos institutos políticos garanticen la independencia financiera de los partidos políticos, la equidad en la contienda política, así como la transparencia en el ejercicio de los mencionados recursos, regulación que se da a través de disposiciones de carácter general, aprobadas con anterioridad a la revisión que establecerán los requisitos que deberán observarse, dando certeza a la misma.

Una vez que se pudo determinar de manera general el objetivo tanto de la figura del financiamiento público como de la fiscalización de la mencionada prerrogativa, corresponde ahora analizar las disposiciones legales que en la materia tienen vigencia en el Estado de Puebla, con la intención de poder determinar de manera precisa el fin que persigue la figura de la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos.

El Capítulo V, del Título Segundo del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, contempla lo relativo a la revisión y vigilancia del financiamiento de los partidos políticos estableciendo en el artículo 51 que los partidos políticos deberán contar con un órgano interno encargado de la administración de los recursos que por concepto de financiamiento reciban, así como de la presentación de informes justificatorios de su aplicación. Debe indicarse que al respecto la exposición de motivos del decreto que promulgó el mencionado ordenamiento legal establece que la finalidad de esta disposición es darle transparencia y limpieza a la comprobación del financiamiento.

El diverso 52 de dicho ordenamiento prevé la existencia de una Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los institutos políticos, con facultades para auditar, fiscalizar y requerir a los propios partidos los informes justificatorios con sustento documental



correspondiente, así como las aclaraciones, documentos e información que considere para la legal administración de los recursos.

Los Lineamientos generales para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado establecen como objetivo alcanzar un mayor grado de eficiencia para el control y transparencia de los ingresos y egresos de los partidos políticos, con el objeto de garantizar que el financiamiento público se aplique correctamente en los rubros que corresponda, garantizándose el correcto uso de dichos recursos que provienen del erario público y respecto del financiamiento privado, que se obtenga en la forma y montos que establece la legislación de la materia.

En este orden de ideas, se puede concluir que el objeto de la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos en el Estado de Puebla persigue los siguientes fines:

A. Garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos con los que cuentan los partidos políticos;

B. Respecto del financiamiento privado, asegurar que su procedencia y monto se ajuste a lo previsto por la Legislación aplicable; y

C. Asegurar condiciones de equidad en la contienda política.

Por lo anterior, se considera que los partidos políticos que aún y cuando rindieron sus informes justificatorios con sustento documental ante la Autoridad Electoral Administrativa, presenten inconsistencias u omisiones derivadas de errores involuntarios propios de la naturaleza humana, siempre y cuando en lo general se hubiesen observado los requisitos formales que como marco de la actividad de fiscalización se establecen en los Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en tanto la justificación de los recursos sea fehaciente, sin dejar de considerar la violación a la norma correspondiente, sí cumple con el objetivo de la revisión motivo del presente.

5.- Que, en ese orden de ideas, debe decirse que después de estudiar el dictamen en comento, se determinó que:

A. El mencionado Organo Auxiliar del Consejo General consideró que existían observaciones en los informes justificatorios del Partido Acción Nacional relativos al rubro de financiamiento determinado como actividades ordinarias permanentes y acceso a medios de comunicación, en atención a que del análisis de los mencionados documentos se detectaron errores u omisiones técnicas que incumplen con lo dispuesto por los artículos 11 y 65 de los Lineamientos Generales para la fiscalización, en atención a que:



a. Presentó de manera extemporánea los informes justificatorios mensuales correspondientes a octubre de dos mil uno y enero de dos mil dos.

b. Un documento exhibido como sustento documental en el mes de abril de dos mil dos presenta fecha caduca.

B. Por su parte, el Partido Acción Nacional alegó en su defensa en el escrito presentado por su representante propietario acreditado ante este Organo Central que:

a. El dictamen que contesta fue elaborado indebidamente ya que no es contemplado por los Lineamientos Generales para la fiscalización, pues es un documento elaborado tomando como base un informe que sin facultades emitió la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, pues considera que la Comisión Revisora debe elaborar un dictamen por cada uno de los informes mensuales que están obligados a presentar los partidos políticos, en atención a lo dispuesto por los artículos 74, 75 y 78 de los Lineamientos.

b. La elaboración de un dictamen que se ocupe de analizar de manera conjunta los informes justificatorios mensuales y el informe anual es contrario a los términos establecidos en los artículos 76 y 78 de los mencionados Lineamientos, además el actuar de la Comisión Revisora resulta contrario a lo dispuesto por los diversos 72 y 73 del mencionado ordenamiento.

c. El dictamen de la Comisión Revisora resulta extemporáneo en atención a que fue aprobado fuera de los plazos previsto por el Lineamiento de Fiscalización en comento, pues debió ser aprobado treinta días después de la fecha de su presentación o bien después de cumplido el plazo para la solventación de observaciones y el mismo fue aprobado el once de diciembre de dos mil dos.

d. Los informes correspondientes a los meses de octubre de dos mil uno y enero de dos mil dos, se presentaron en forma extemporánea pero eso de ninguna manera puede considerarse como incumplimiento a un acuerdo del Consejo General o violación a alguna disposición del Código de la materia.

e. Respecto del incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 65 de los Lineamientos Generales de fiscalización debe señalar que la Autoridad Fiscalizadora no le requirió en tiempo y forma la solventación de esa observación que se presentó en el mes de abril del año próximo pasado, pues el requerimiento se efectuó el nueve de octubre del mencionado año, fecha en la que se encontraba ante la imposibilidad material de subsanar dicha violación.



Con la finalidad de acreditar su dicho el mencionado Instituto Político acompaño copia simple del oficio número TESO 012/2002, de fecha 17 de octubre del mencionado año, por medio del cuál el Secretario de Administración y Finanzas C.P. Jesús Guillermo Cortes Rojas, da contestación a diversos requerimientos hechos por la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación, documental privada a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 358 fracción II, 359 párrafo segundo del Código de la materia y 7 del Proceso Administrativo para la resolución de controversias en cita.

El Consejo General del Instituto considera que con la finalidad de hacer efectivo el principio de exhaustividad que se debe observar por todas las Autoridades Electorales, debe ocuparse de atender de manera particular los juicios argumentativos que en su defensa expresó el Partido Acción Nacional.

Es este orden de ideas, y en lo que respecto a lo señalado por mencionado Instituto Político, asentado en los apartados identificados con los grafemas a. y b., debe decirse que no le asiste la razón al Partido observado, en atención a que como se establece en la introducción de los Lineamientos Generales de Fiscalización, el principal objetivo de la reglamentación en la materia es fomentar la cultura de la rendición de cuentas y la transparencia en la administración de los recursos de los partidos políticos, por lo que se considera que los informes mensuales deben necesariamente guardar relación directa con el informe anual que deben rendir los mencionados organismos políticos, pues independientemente de que los primeros son el sustento del segundo, se puede entender que funcionan como medio de comprobación de lo informado al final del periodo.

En cuanto al argumento planteado en el apartado c., debe decirse que su argumentación resulta imprecisa pues contrario a lo que afirma no se puede considerar que el dictamen materia de este fallo fuese aprobado de manera extemporánea pues tal y como lo establece el artículo 75 incisos a), b) y c) de los Lineamientos Generales de Fiscalización la Comisión Revisora contará con sesenta días para revisar los informes anuales, en el caso de que existan errores u omisiones que deban solventar los partidos políticos se otorgará un plazo de diez días para la solventación de los mismos y una vez fenecido cualquiera de los plazos anteriormente citados el mencionado Organo Auxiliar del Consejo General contará con treinta días para emitir el dictamen correspondiente.

En este orden de ideas, debe decirse que en caso de que no haya requerimiento la Comisión Revisora contará con 90 días para emitir su fallo y si se tuviera que requerir la solventación de algún error u omisión



el plazo se ampliaría hasta cien días, considerando pertinente indicar que el cómputo del mencionado plazo debe iniciar una vez que concluyó el término de setenta días concedido a la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación para revisar el informe justificatorio, requerir al partido político, en su caso, y emitir el informe que dirigirá al mencionado Organismo Auxiliar del Consejo General.

Tal y como lo asienta el Instituto Político observado, el informe anual lo presentó el día 12 de junio de dos mil dos y en el particular la Comisión Revisora requirió al Partido Acción Nacional la solventación de errores u omisiones, por lo que el mencionado Organismo Auxiliar contaba con cien setenta días a partir de la fecha de recepción del mencionado informe para emitir su dictamen. Es pertinente señalar que con la finalidad de computar de manera exacta el mencionado término no se debe pasar por alto que el día veinticuatro de julio del mencionado año este Organismo Central aprobó el acuerdo por el que determinó el horario de labores del Organismo, mismo que a la fecha se encuentra vigente, siendo este de lunes a viernes de ocho horas con treinta minutos a quince horas.

Por lo anterior, una vez efectuado el mencionado cómputo se llega a la conclusión de que el dictamen materia de este fallo se aprobó en el día ciento cuarenta y tres del mencionado plazo por lo que su sanción no se puede considerar como extemporánea.

Respecto del argumento vertido por el Partido Acción Nacional, que se contiene en el apartado d. citado líneas arriba, este Organismo Central considera que no le asiste la razón al Partido Político observado, pues como se estableció en el considerando número 4 de este fallo si bien es cierto que la finalidad de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos es fomentar la cultura de la rendición de cuentas y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, también lo es que la presentación extemporánea de dos informes justificatorios representa una violación a lo dispuesto por los Lineamientos de la materia, aún y cuando no se puede considerar como una omisión que vulnera los fines que se persiguen con la implementación de los procedimientos de revisión de cuentas de los partidos políticos.

Por último, en lo que respecta a la observación planteada en el apartado e., se considera que si bien es cierto el partido político observado acredita que la solventación de la observación a la que hace referencia se efectuó hasta el mes de octubre del año dos mil dos, aún y cuando el documento observado se exhibió junto con el informe del mes de abril de ese año, también lo es que el mismo reconoce la imposibilidad material en la que se encuentra para solventar dicha observación, sin que se deje de observar que como él mismo lo señala el impedimento material depende de personas ajenas a la estructura de su partido.



Para comenzar con el estudio integral de todas las constancias que integran el expediente que se resuelve con este fallo, este Organismo Central estima que se debe tener en consideración lo siguiente:

Los Lineamientos Generales para la fiscalización del financiamiento a los partidos políticos acreditados ante el Instituto Electoral del Estado, establecen de manera clara y ordenada el proceso de revisión al que deben someterse los informes justificatorios; así como el procedimiento que deben ejecutar tanto la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación como la Comisión Revisora, para determinar si la aplicación del financiamiento se efectuó de acuerdo a las disposiciones aplicables o bien existen observaciones en el manejo de los recursos con que cuentan los Partidos Políticos para desarrollar sus actividades.

Visto lo anterior y en atención a que la revisión de los informes justificatorios que en este caso se relacionan con la comprobación del financiamiento contemplado bajo el rubro de actividades ordinarias permanentes y acceso a medios de comunicación es un proceso que se compone por una serie de momentos procesales perfectamente determinados por el Lineamiento para la Fiscalización que se ha venido citando, mismo que contempla desde la determinación del plazo para la presentación de los informes justificatorios; el establecimiento de Organos de Administración al interior de los Partidos Políticos; la definición de cada uno de los rubros de financiamiento al que pueden acceder los mencionados institutos políticos; la forma de justificar las erogaciones efectuadas por ellos; las instancias de revisión de la aplicación del mismo; así como el procedimiento para subsanar los errores, omisiones u observaciones que se detecten en la revisión, se demuestra que el diseño del régimen de fiscalización al que se encuentran sometidos los partidos políticos acreditados ante este Organismo Central tiene como finalidad garantizar que las revisiones que en esta materia efectúe el Organismo Auxiliar del Organismo Superior de Dirección facultado para ello se efectúen respetando la garantía de audiencia de los partidos, así como los principios que rigen la función electoral.

Una vez que este Organismo Central estudió y analizó todas y cada una de las constancias que integran el expediente formado a la controversia materia de esta resolución, se arriba a la conclusión de que el dictamen número DIC/CRAF-018/02 de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Organismo, cumple con los requisitos señalados por el artículo 77 de los Lineamientos Generales que se han mencionado.

6.- Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 53 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, el



Consejo General del Instituto Electoral del Estado resuelve aprobar en sus términos el dictamen materia de este fallo, en atención a que como se señaló en el considerando inmediato anterior, en su contenido consta la correcta ejecución del procedimiento de revisión establecido en los Lineamientos generales para la fiscalización de la que derivaron las observaciones que se han presentado líneas arriba.

7.- Que, en atención a que el Consejo General del Organismo determinó la existencia de observaciones en la revisión de los informes justificatorios del Partido Acción Nacional, de acuerdo con lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 53 del Código de la materia, lo procedente es remitir al Tribunal Electoral del Estado el expediente formado con motivo de este fallo, para que en términos de lo dispuesto por el mencionado Ordenamiento Legal dicha Autoridad Jurisdiccional determine lo conducente.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción XXV del artículo 91 del Código Comicial vigente se faculta al Consejero Presidente del Consejo General del Organismo para remitir al Tribunal Electoral del Estado la documentación correspondiente.

8.- Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91 fracción XXV del Código aplicable, el Consejo General faculta al Consejero Presidente para notificar el contenido de la presente resolución al Partido Acción Nacional, en los términos establecidos por el Proceso Administrativo para la resolución de controversias que se ha citado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado

R E S U E L V E

PRIMERO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado es competente para conocer y resolver la controversia derivada del dictamen número DIC/CRAF-018/02 de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditado ante este Organismo Electoral, relacionado con los informes justificatorios presentados por el Partido Acción Nacional, acreditado ante este Organismo Central, bajo el rubro de actividades ordinarias permanentes y acceso a medios de comunicación, según lo dispuesto por el considerando número 1 de este fallo.

SEGUNDO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado reconoce la personalidad del Representante Propietario del Partido Acción Nacional, Licenciado Luis Enrique Palacios Martínez, en términos de lo dispuesto por el punto 2 de considerando de la presente resolución.



TERCERO.- El Consejo General del Instituto Electoral del Estado aprueba en sus términos el dictamen número DIC/CRAF-018/02, de la Comisión Revisora de la aplicación del financiamiento de los partidos políticos acreditado ante este Organismo Electoral, relacionado con los informes justificatorios presentados por el Partido Acción Nacional, acreditado ante este Organismo Central, bajo el rubro de actividades ordinarias permanentes y acceso a medios de comunicación, según lo dispuesto por los puntos considerativos números 5 y 6 de este fallo.

CUARTO.- Se faculta al Consejero Presidente del Consejo General, para remitir al Tribunal Electoral del Estado el expediente formado con motivo de esta resolución, de acuerdo con lo dispuesto por el considerando número 7 de este fallo.

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución en los términos dispuestos en el considerando 8 de esta resolución.

Esta Resolución fue aprobada por unanimidad de votos de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en sesión ordinaria de fecha veintiséis de marzo de dos mil tres.

CONSEJERO PRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL

**LIC. ALEJANDRO ARTURO
NECOECHEA GOMEZ**

**MTRO. JOSE ANTONIO
BRETON BETANZOS**